

# Educación para la Paz en Euskadi: una propuesta

JON-M. LANDA

EX DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO VASCO

Las políticas de educación para la paz tocan la fibra más sensible de la sociedad: sus heridas. Su manejo se torna imposible y contraproducente si se pretende avanzar en solitario. Por eso es fundamental un diseño de contenidos y de procesos con transversalidad social y política. Estas políticas deben nacer y canalizarse desde la base social, de abajo hacia arriba, con transparencia y participación especialmente desde el mundo educativo, entroncando con las iniciativas anteriores. Y esto de entroncar es clave: es la prueba del algodón para crear confianza e implicar a todos. Porque construir es aportar a lo ya hecho, es reeditar el consenso, es tener espíritu –y praxis política– inclusiva. Esto es algo de sentido común.

El Gobierno vasco, sin embargo, desde el mismo verano de 2009, comenzó, especialmente en esta materia, una larga lista de reproches a todo lo hecho: sin distinciones y en tono grueso. La política de comunicación del Gobierno insistía una y otra vez en que todo lo anterior se había hecho mal. Se acusaba a los profesores y profesoras de «neutralidad» y a los «nacionalistas», de tibieza e incluso de ser «cómplices» de la violencia. La gota que ha colmado el vaso ha sido un documento de 38 páginas ('Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia') sin una sola propuesta concreta pero plagado de insinuaciones que han terminado, a modo de patada al avisero, por agitar todos los fantasmas.

La comunidad educativa, no nos olvidemos, la destinataria directa del plan, asiste, mientras tanto, como mera convidada de piedra y se debate entre sentimientos encontrados: indignación, miedo, impotencia, hastío, ansiedad... Y a nada contribuyen imágenes periodísticas de pánico como la 'construcción del zulo' en el aula, si bien, por decirlo todo, es tal la ambigüedad y la falta de concreción del documento gubernamental que deja una puerta demasiado abierta para evitar portazos en tiempos de tormenta.

La política comunicativa en esta materia ha sido un error garrafal sembrando el campo de minas para futuros movimientos. Así las cosas: ¿Cómo salir del laberinto? El documento de reformulación del Gobierno considera que la unidad 'Bakerako urratsak', que trabajó a modo de proyecto piloto los testimonios

por escrito de las víctimas en la legislatura pasada, «resulta incompleta, imprecisa y por lo que se procede a su modificación» (sic pág. 32). Ésa es la conclusión, sin exponer a partir de qué argumentos pedagógicos o evaluativos se contradicen los resultados extraordinariamente positivos, publicados y acreditados por un grupo independiente de profesores universitarios. Dos años de trabajo, miles de horas de implicación y resultados positivos, apolíticos, testados... no valen. ¿Por qué? Es como si después de toda la negociación de la legislatura anterior se empezara de cero y se arrojará por la borda el

esfuerzo y buen hacer de tantos técnicos y profesionales y, también debe subrayarse, miles de euros de todos los contribuyentes. Se prometen ahora nuevos materiales, unidades, cursos y planes, pero sin concretar, y vuelta a empezar como en el mito de Sísifo, que subía la piedra a la montaña para, arrojada de nuevo, tener que volver a empujarla. Y aquí, sin embargo, puede estar la clave para darle la vuelta a la situación, siempre que haya verdadera voluntad.

El Gobierno ha decidido, con buen juicio, retrasar la aprobación del plan a la búsqueda de consenso. Pero la desconfianza se ha estado desparramando por la comunidad educativa y por la sociedad a espaldas. Va a ser necesario un trabajo impropio para recuperar la confianza. Y ello demanda, en primer lugar, un acuerdo político amplio. Pero, en segundo lugar, dar garantías a la ciudadanía y a la comunidad educativa, en particular, de que esta materia no va a incorporar ni un ápice

de adoctrinamiento o contenido político partidario. Y a ese respecto me atrevo a hacer una sugerencia. El Gobierno bien podría pactar con la oposición que la unidad didáctica que el anterior dejó preparada para ser llevada a los centros no se modifique, y se oferte y acompañe –también con módulos de formación para el profesorado (Garatu)– desde el Departamento de Educación. Al tiempo que se inicia un nuevo proyecto piloto –no una iniciativa general para toda la escuela– que permita ensayar, como insiste el Gobierno, una nueva unidad con el foco puesto en privilegiar la presencia física de las víctimas. Ésta parece ser la piedra de toque que agita todos los vientos. ¡Que convivan, entonces, dos unidades y se comparen luego los resultados!

Pero, y esto sería esencial, poniendo todo (diseño de contenidos, cursos del profesorado, implementación, evaluación) en manos de un comité de expertos pedagogos blindado: esto es, respaldado por todo el arco parlamentario, independiente, integrado por profesionales de prestigio cuya valía y autoridad den confianza a todos los sectores políticos y sociales. Comité que bien podría ser paritario: dos miembros elegidos por el Gobierno y dos por la oposición con consenso. Creo que eso traería confianza y paz a la materia, y comenzaría a limpiarse el veneno que entre unos y otros no se deja de inyectar en una materia que, paradojas de la vida, habla de 'educar', 'para la paz' y 'los derechos humanos'.

A situaciones de desconfianza excepcionales, medidas de garantía excepcionales: usar ese comité de sabi@s como vía de despolitización. Si un gobierno tuviera la generosidad y altura de miras de 'pacificar' esta materia, y la oposición facilitara una salida así blindada, nos darían a todos una verdadera lección de educación para la paz que, sin duda, tendría la expansiva fuerza pedagógica –y política– de predicar con el ejemplo.



:: JOSÉ IBARROLA

## ANTÓN



# CARTAS AL DIRECTOR

## Calidad educativa

Una de las quejas más repetidas por las familias españolas es la de la baja calidad de la enseñanza de sus hijos. Está claro que para tener una enseñanza de calidad se requieren profesores de calidad: el profesorado es el principal activo del servicio público de enseñanza. Como si de entierros aéreos se tratara, conmovedores como el sueño de los enanos, el Gobierno navega en la dirección contraria: en lugar de mejorar los recursos humanos de la enseñanza, trata de contagiarse los males de la laboralización a la Administración educativa mediante la excusa del pacto social; puerta falsa para poner a los profesores bajo la tiranía sindical, a través de cuestiones como el Acuerdo Laboral Básico, la jubilación LOE o la Memoria Económica LOE hasta 2015. Una gestión eficiente de los recursos humanos educativos implicaría: mejorar la formación universitaria del profesorado, reformar el sistema de acceso a los cuerpos docentes, recuperar la figura del catedrático de enseñanza secundaria, armonizar el acceso a la función docente en todas las comunidades autónomas, reorientar la formación permanente del profesorado, elaborar un estatuto básico de la función pública docente, reconocer a los maestros la condición de autoridad pública y crear una carrera docente con distintos grados. :: **ÁNGEL ARGÜELLES LÓPEZ DE MATORANA**. BILBAO

## Asimilación al euskera

En respuesta al señor Bujanda (28-4-10): ¿Me quiere usted explicar qué es la 'normalización del euskera'? Al nacionalismo se le llena la boca con la expresión, pero luego todo parece reducirse a exigir hablar euskera para beneficiarse de alguno de los magníficos puestos de trabajo públicos que se ofertan en Euskadi o conseguir el 'Eusko label' adecuado. Y sí, mire, señor Bujanda, 'normalizar el euskera' significa reducir el español al mínimo, al menos hasta donde se pueda, como se hace en el metro de Bilbao, donde oír hablar la lengua de Iparragirre es difícil, pero uno descubre que los carteles en la lengua del 80% de los vizcaínos (que no es el euskera) están al mismo nivel que el inglés, como si fuera una lengua ajena.

Siempre se menciona que España es diversa, pero se niega la realidad afirmando que «un alto porcentaje del Estado es plurilingüe», lo cual es falso, porque se intenta hacer creer que todos los vascos, catalanes o gallegos somos bilingües cuando, en realidad, la presencia de los idiomas minoritarios es eso: muy minoritaria. Y la pretendida normalización no es más que la justificación de reivindicaciones nacionalistas, a base de exagerar las diferencias entre españoles. Si una lengua no se usa, la solución no es obligar a hablarla, como hizo el anterior Gobierno nacionalista con los funcionarios.

Menos buenismo y más realidad. Menos acusar de prejuicios a los demás y menos pre-

tender 'integrar' con las lenguas, cuando hay profesionales como los maestros que han tenido que irse del País Vasco porque no hablaban euskera ¿Eso es integración? ¿No será más bien asimilación?

**ANDRÉS FERNÁNDEZ GIL**. SESTAO-VIZCAYA

## Corrupción política

En principio, la comparación podría parecer un tanto absurda, aunque en el fondo no lo sea tanto. La de comparar a algunos políticos con aquel par de mañicos empeñados en separar unos metros la basílica del Pilar del río Ebro. Hay una salvedad, el 'dolo' de los primeros y la inocencia de los segundos: Depositaron sus chaquetas sobre unos arbustos e iniciaron su tarea. Tras largas horas de empujar el templo, uno de ellos volvió la vista atrás y exclamó: ¡Coño, maño! que ya vale, fíjate si lo hemos movido que ya ni las chaquetas se ven.

Algo así les ocurre a nuestros políticos, centrados en trifulcas que nada tienen que ver con la grave situación del momento, el paro, la crisis, la inmigración o la delincuencia. Entre tanto otros amasan grandes fortunas por comisiones ilegales que encarecen el producto que en definitiva habremos de pagar todos. En resumen, es un juego de niños por un puñado de canicas, que ellos ven como futuros votos mientras los presuntos listillos roban sus y nuestras carteras. Y luego nos quejamos de ser el vagón de cola.

**JOSÉ RIVAS AMORRORTU**. DURANGO-VIZCAYA